

Militarismo y redemocratización en América Latina

Francisco Zapata

DURANTE GRAN PARTE DE LA DÉCADA de los setenta, Argentina, Brasil, Uruguay y Chile fueron gobernados por regímenes controlados por las fuerzas armadas. A principios de los ochenta, los tres primeros países eligieron autoridades políticas por medio de elecciones. Chile continúa aún bajo el dominio militar.

I. Características de los regímenes militares

Las características de los regímenes militares mencionados difieren radicalmente de otros que tuvieron lugar en esos países y en otros durante el transcurso del siglo xx en América Latina. En efecto, la participación militar en la política durante la década de los setenta fue *institucional*, es decir, que comprometió a las fuerzas armadas más allá de los caudillos que pudieron expresarse en otras épocas.

La forma institucional que asume la participación militar en la política se identifica con la construcción de un nuevo régimen político que ha sido denominado *burocrático-autoritario*. Dicho régimen político está estrechamente ligado a una nueva etapa del desarrollo económico de América Latina en la que los vínculos a la economía internacional han sido reforzados a través de la aplicación de medidas de liberalización del comercio y, en general, por políticas de corte monetarista en el plano interno. Aparece así un grupo político constituido por una alianza de tecnócratas y militares que asumen cargos en la administración de las empresas estatales y promueven inversiones conjuntas (*joint-ventures*) entre el capital nacional y el capital transnacional.

Dicho régimen asocia estrechamente al autoritarismo con la transnacionalización de la economía. Se facilita enormemente tanto la inversión como la repatriación de beneficios para el capital extranjero.

Aparentemente, la puesta en práctica de dicho régimen tuvo un éxito relativo. Durante los primeros años de su aplicación, sobre todo en Brasil y Argentina, se pensó que finalmente se había llegado a la modernización tan anhelada por ciertas élites políticas. No obstante, su solidez fue pasajera. Ya a fines de los años setenta las presiones sociales revelaron que la represión no podía suprimir las diversas peticiones que planteaban tanto los sectores populares como el empresariado nacional no vinculado al capital extranjero.

Esta situación desencadenó en Brasil la llamada "liberalización" que se expresó por medio del restablecimiento de algunos derechos civiles, de la realización de algunas elecciones en forma directa, de la apertura en materia de comunicación de masas. Incluso se restableció el derecho de huelga en forma controlada. La liberalización tuvo el propósito de ampliar la base de sustentación política del Estado pero mantuvo el dominio militar sobre las decisiones fundamentales. Liberalización y apertura son procesos controlados por el régimen autoritario. Vale la pena entonces diferenciar ambos procesos de la redemocratización, que irá más lejos.

En Argentina, la transición fue mucho más abrupta. En efecto, debido a la derrota militar en la guerra de las Malvinas, el proceso de reconstitución del sistema político se expresó a través de la convocatoria de elecciones para remplazar a las fuerzas armadas en la administración del Estado. Además, en el caso argentino, debe mencionarse que la crisis política desencadenada por la derrota militar vino a agregarse a un deterioro económico muy pronunciado que demostró la incapacidad del régimen autoritario para encarar los desafíos de la transformación económica en este fin de siglo. El incremento de la deuda externa, el debilitamiento de la industria nacional, el excesivo gasto militar, la represión de las demandas de mejoras salariales y el deterioro de la distribución del ingreso hicieron claro que el régimen autoritario no había podido encontrar una fórmula viable para el país.

De manera que tanto el milagro brasileño como la aplicación de políticas monetaristas fueron modelos cuya fuerza fue más aparente que real. Ni Delfim Neto, ni Martínez de Hoz ni los *Chicago Boys* pudieron hacer estable y permanente lo que a principios de los setenta parecía eterno.

II. La redemocratización

Es entonces en un contexto de deterioro político y económico que se desarrolla la transición hacia la democracia. En países como Argentina, Brasil o Uruguay dicha transición no es tanto el resultado de una presión organizada de la sociedad civil como la expresión del fracaso de los regímenes militares para constituir un sistema de decisiones estable, durable y flexible. Además, dicha transición ha mostrado, al

menos hasta ahora, que existe una nueva relación entre sociedad civil y sociedad política en la que actores sociales como los pobladores marginales, los jóvenes, las mujeres, los católicos, los protestantes, las asociaciones culturales y una infinidad de otros grupos pasan a ocupar el espacio que, en décadas anteriores, habían monopolizado los partidos políticos o movimientos como el peronismo o el varguismo

Los actores sociales clásicos, como los sindicatos, han perdido importancia como agentes demandantes. Ya no es sólo por medio de la negociación colectiva que se llevan a cabo las discusiones sobre la repartición del producto social sino también en otras esferas. Además, la puesta en práctica de políticas monetaristas redundó en serios incrementos del desempleo, lo cual redujo la base de sustentación del sindicalismo. Los agremiados son una minoría frente al número de cesantes. En esas condiciones, los sindicatos pueden sólo realizar una acción defensiva que no siempre tiene éxito, dada su debilidad estructural en el sistema de poder. Las huelgas, que casi desaparecieron durante la vigencia de los regímenes militares, no involucran hoy tampoco a grandes grupos de trabajadores. En todo caso, las perspectivas de éxito de conflictos planteados en términos políticos son hoy escasas. No queda sino concluir que el sindicalismo debe concertarse con los demás actores sociales, tanto empresarios como cesantes, dadas las presiones que la transición hacia la democracia y la crisis económica ejercen sobre las posibilidades de los países para mejorar la situación de los asalariados.

El proceso de redemocratización no puede entonces sólo restaurar lo que existía antes de la toma del poder por las fuerzas armadas. La liberalización, la apertura y la redemocratización no son sólo válvulas de escape a las tensiones derivadas de la crisis económica que sufren los regímenes autoritarios. Existen transformaciones en la distribución sectorial de las actividades económicas, en la estructura de la fuerza de trabajo, en la forma en que la sociedad se organiza y en los objetivos para los cuales se organiza que deben ser tomados en cuenta por dicho proceso. Ni el autoritarismo ni la crisis han sido erradicados de las sociedades que los padecieron o los padecen. Podemos circunscribir algunas de dichas transformaciones a tres áreas que nos parecen centrales: el papel de los partidos políticos, el lugar de las fuerzas armadas en el régimen político-autoritario y el carácter de la movilización social.

Los partidos políticos

La organización de los intereses de los diversos grupos sociales, que hasta ahora había sido cumplida por los partidos, ya no puede limitarse a ellos. En efecto, su eficacia fue puesta en duda tanto por la implacable crítica a la que se vieron sometidos por los regímenes militares

como por las fallas que se percibieron en su acción, al analizarla retrospectivamente. Su legitimidad se ha debilitado. Además, la viabilidad de los proyectos alternativos que han presentado ha sido cuestionada y discutida por diversos grupos en la sociedad. De esta forma, la organización de los intereses sociales se ha también democratizado en múltiples formas de agrupamiento que no necesariamente culminan en los partidos políticos. Por ello cabe suponer que en los próximos años será más difícil ubicar interlocutores con proyectos definidos; el sistema de decisiones estará muy atomizado. Los nuevos responsables del Estado deberán tomar en cuenta esta situación para encontrar maneras de legitimarse en el poder. También cabe preguntarse acerca de cuál será la forma con la que el régimen producto de la redemocratización encontrará un proyecto económico que sea viable. En efecto, si la industrialización sustitutiva fue el modelo económico del populismo, si el liberalismo monetarista fue el modelo económico de los regímenes autoritarios, ¿cuál será el proyecto del régimen democratizado? ¿Es posible olvidar las dificultades que tuvieron los militares para lograr dicho propósito?

El lugar de las fuerzas armadas

El lugar de los militares en la sociedad nacional posautoritaria está en entredicho. Quizás en Brasil esté más definido que en Argentina, en donde el fracaso de las Malvinas deslegitimó a tal punto su inserción en la sociedad que es posible pensar que el régimen de Alfonsín tiene un margen de maniobra mayor, sobre todo porque puede proceder a renovar la imagen de dicho sector con mayor libertad que el presidente Sarney. En todo caso, a pesar de la especificidad de cada situación nacional, es indudable que dicho lugar pasa también por la reflexión que los propios militares hagan respecto de su paso por el poder. Ya no es posible asumir esa experiencia en forma inocente. Las heridas son demasiado profundas como para tratar de olvidarlas. Además, existen los problemas propiamente militares de la región a los que quizás deberían dedicarse con más atención las fuerzas armadas. Hasta ahora, la preocupación por la estabilidad política interna los ha distraído del cumplimiento de su papel central. En este sentido, la política de los regímenes redemocratizados frente a las fuerzas armadas será crucial y debe descansar en una redefinición de su lugar en la sociedad nacional.

El carácter de la movilización social

¿Cómo imaginar la acción de los sectores sociales surgidos a la sombra de la represión (pobladores, jóvenes, religiosos, etc.) en esta coyuntu-

ra? ¿Cómo articular tan distintos intereses, sobre todo cuando esos sectores han sufrido el impacto pleno de las políticas represivas, de la cesantía, de la rebaja de los salarios, de la humillación, de la exclusión política? Se trata de asumir las consecuencias que han tenido las políticas sociales y económicas puestas en práctica en la última década y media. Dichas consecuencias tienen que ver con el achicamiento del Estado como empleador, lo que redundó en el despido de miles de personas en sectores, como la salud, la educación y la administración pública. Apareció el desempleo de cuello blanco. A la vez, el cierre de fábricas medianas y pequeñas, y las medidas de incremento de la productividad en los sectores estratégicos de la economía creó un volumen muy alto de cesantes en las capas obreras. Pero, más que estos dos impactos, lo que ha aparecido en forma generalizada es la cesantía de los jóvenes que ensayan su entrada al mercado de trabajo sin conseguirlo. Son ellos quienes sufren en forma más descarnada el efecto de las políticas liberales. En 1982, casi la mitad de los jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 24 años estaba cesante en el Gran Santiago. No debe sorprender entonces que la movilización social descansa sobre todo en esos grupos. Porque, en resumidas cuentas, si más de la mitad de la población total de los países latinoamericanos está constituida por personas de menos de 24 años y si una proporción importante de este grupo no encuentra una actividad digna en la cual desempeñarse, ¿cómo considerar anómalo que sean ellos quienes se rebelan?

Es a partir de estas tres áreas que debemos sintetizar los problemas que surgen al plantearse la redemocratización en América Latina. Sin embargo, existe un último punto que vale la pena discutir, referido al contenido de los proyectos de democratización. En efecto, no hay sólo una concepción acerca de la forma que debe asumir este proceso y por ello vale la pena presentar estas alternativas.

Una primera concepción parte del supuesto de que los ciudadanos comparten valores comunes que trascienden los conflictos de interés. La nación es una referencia compartida por todos y la herencia histórica es común para todos sus integrantes. Aquí, la redemocratización es la recuperación de una comunidad de intereses en donde los clivajes son postergados. El régimen político descansa en una dominación legítima en la que los ciudadanos ven reflejadas sus ambiciones, sus preocupaciones. La característica central de esta concepción es la búsqueda del *consenso*, más allá de las diferencias que puedan existir entre aquellos que están arriba y aquellos que están abajo en la estructura social. Los de arriba y los de abajo entran en un pacto social que reconoce la jerarquía pero no la convierte en condición de la legitimidad política. El desplazamiento del autoritarismo y del militarismo descansa en la necesidad de encontrar un eje de concertación entre vastos grupos sociales con intereses diferentes. Además, la necesidad de dicho pacto se fundamenta también en el imperativo de compensar

la desagregación de la estructura social inducida por las políticas económicas del régimen autoritario.

Por otra parte, y recogiendo la herencia de una tradición ya larga en la historia del continente, existe una segunda concepción en la que la sociedad está dividida en clases que poseen subculturas propias que interactúan en forma conflictiva. El régimen político es un acuerdo provisorio entre organizaciones que representan intereses que no son necesariamente convergentes. Aquí, la búsqueda de la democracia no se limita a la legitimación de un régimen político; es también la búsqueda de transformaciones profundas de la estructura de poder. El proceso de redemocratización es un proceso que reestablece la continuidad con las luchas sociales del pasado. Se trata entonces de crear un nuevo modelo de interacción de las clases sociales. Esta concepción no descansa entonces en el propósito de lograr un consenso. Busca sobre todo establecer las condiciones propicias para un conflicto, regulado si se quiere, pero abierto, no reprimido.

Los dilemas expuestos confrontan a todos aquellos que forman parte de la dinámica democratizadora. No cabe plantearlos como alternativas sino más bien como proyectos trenzados en una tensión en donde las idiosincrasias nacionales tienen un papel central. En efecto, no es lo mismo situar el debate en Brasil que en Argentina, Uruguay o Chile. No sería además fructífero. Es un debate que apela a las formas a través de las cuales se construyeron los estados nacionales, los sistemas políticos y las organizaciones sociales. En cada nivel pueden observarse los problemas que concentran la atención de los que tienen el deber de construir los nuevos sistemas institucionales. Se trata, en suma, del desafío histórico que deben resolver para evitar, en todo lo posible, el silencio, la represión y la muerte que son la herencia de los regímenes militares.